

Cruzando miradas

María Isabel Blanco Velasco

MARGUERITE BEY Y DANIELÈ DEHOUE, 2006

La transition démocratique au Mexique. Regards croisés

CRI-IEDES Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne-LESC,
CNRS-Université de Paris X Nanterre, Recherches Amériques Latines,
L'Harmattan, París.

El libro *La transición democrática en México. Miradas cruzadas*, publicado en francés, forma parte de los resultados del trabajo de dos grupos de investigación franco-mexicanos que involucraron a diversas instituciones, investigadores y estudiantes de los dos países entre 2000 y 2005.

El primer proyecto —“El municipio frente al sistema electoral y el multipartidismo: antropología política de

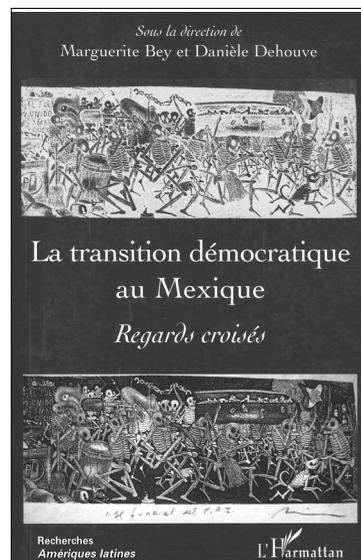
comunidades rurales e indígenas del estado de Guerrero”¹—, bajo la responsabilidad de Danièle Dehoue² y

¹ Financiado por ECOS-NORD (Evaluación-Orientación de la Cooperación Científica, Programa de Cooperación e Intercambio Universitario Técnico y Científico Francia-América Latina).

² Laboratorio de Etnología y de Sociología Comparativa (LESC), Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), Universidad de París X Nanterre.

MARÍA ISABEL BLANCO VELASCO: Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.
isabelblanco99@yahoo.com

Desacatos, núm. 24, mayo-agosto 2007, pp. 293-300.



Victor Franco Pelletier³, permitió estudiar una decena de municipios indígenas de Guerrero. El segundo proyecto —“Cambio social y procesos electorales en las regiones indígenas”⁴—, fue dirigido por François

³ Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Distrito Federal.

⁴ Contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Lartigue⁵ con la colaboración de diversos centros de investigación franceses.

Los dos proyectos produjeron diversos encuentros académicos y publicaciones. Gran parte de los resultados fueron publicados en español, por lo que no son accesibles a los lectores de lengua francesa. El proyecto de publicación en francés surgió para estos lectores interesados en conocer diversos puntos de vista sobre la transición democrática en México.

Las ocho diferentes “miradas” que componen esta obra y que pudieron cruzarse en ella vienen de dos doctorantes francesas, dos mexicanas, dos investigadoras francesas y dos investigadores mexicanos. Esta tarea se realizó con los apoyos y acuerdos de los dos países, la voluntad de los autores y el entusiasmo de las coordinadoras.

Estas miradas asocian tres tradiciones teóricas que se objetivaron en las investigaciones presentadas: el estudio de las transiciones democráticas desde los modelos teóricos construidos por los autores, el análisis micro-social que se dirige a la participación de los actores en el nivel municipal e inframunicipal de las localidades rurales y el estudio de la innovación de modelos institucionales para la participación democrática. Un aporte del libro es la pluralidad de visiones metodológicas y los diálogos posibles entre investiga-

ciones desarrolladas a escala diferente y con enfoques diversos.

Marguerite Bey y Danièle Dehouve integran la obra en dos grandes partes.

En la primera, llamada “El multipartidismo institucional”, en su introducción de 22 páginas, las coordinadoras nos ofrecen una síntesis de casi tres décadas del proceso de apertura del sistema político mexicano. Describen las nociones de partido “oficial” y presidencialismo a la mexicana, y el camino hacia la participación pluripartidista. Las autoras aseguran que la transición democrática en México es, ante todo, la historia de las luchas políticas por lograr la participación de los partidos y las reformas de las instituciones y los procedimientos electorales. Las luchas populares, contestatarias y hasta las que se reclamaban revolucionarias, se fusionaron en un movimiento social en torno al reclamo por el respeto a la ciudadanía política. Durante 15 años el país vivió al ritmo de las elecciones, de las acusaciones de fraude, de los experimentos y las innovaciones institucionales, desde los niveles más altos de gobierno hasta el más pequeño de los municipios. Esta apertura progresiva al pluralismo político ha estado acompañada por la descentralización financiera que condujo flujos de dinero cada vez más considerables a los estados y municipios. Bey y Dehouve nos mencionan brevemente las etapas de la descentralización, tanto la de los servicios como la fiscal y financiera. Asimismo, señalan la relación que tiene con algunos de los programas de política social destinados a combatir la marginación y la pobreza. Del Coplamar a los Co-

mités de Planeación para el Desarrollo (Coplades), y de Solidaridad a Progreso y Oportunidades, nos presentan un panorama de las críticas de las que han sido objeto por parte de académicos, ciudadanos y partidos.

El texto de Ilán Bizberg, “La transición vacía en México”, nos propone un modelo teórico comparativo de los procesos de cambio en cinco países seleccionados: Argentina, Brasil, Chile, Checoslovaquia y la Unión Soviética. El modelo toma en cuenta tres ejes cruciales en los procesos de democratización: a) la presencia de una sociedad civil autónoma de los partidos en el proceso de democratización; b) la institucionalización de un sistema de partidos; c) el desmantelamiento de las instituciones autoritarias del antiguo régimen. Advierte que la mayor parte de los estudios sobre transición y consolidación democrática se sitúan en la perspectiva de la democracia representativa, es decir, en las instituciones políticas, los sistemas de partido y la responsabilidad de las élites gobernantes. Desde hace algunos años la atención de analistas se dirige hacia la organización de la sociedad civil, hacia el “empoderamiento” de los ciudadanos. La participación de la sociedad civil en los procesos de transición no implica sólo acelerar o acentuar estos últimos, sino que juega un papel decisivo para deslegitimar, debilitar el poder de los gobernantes autoritarios, afirma Bizberg.

En esta mirada comparativa con otros procesos de transición, Bizberg encuentra que en México las élites autoritarias concibieron un proyecto de salida y tuvieron éxito en dirigirlo

⁵ CIESAS-Distrito Federal, con la colaboración de centros franceses como LESC, el Centro de Investigación y de Documentación de América Latina (Credal)-CNRS Paris III, y el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA).



José Téllez, Elías

Proceso electoral en Acapulco, Guerrero, 2006.

► 295

casi sin concesiones, además de que la oposición fuerte no ha logrado organizarse con éxito como en Brasil, Checoslovaquia o la Unión Soviética. El gobierno mexicano logró canalizar las fuerzas políticas y sociales por la vía de las elecciones e impidió el desarrollo de un movimiento de la sociedad civil tipo “Solidarnosc” en Polonia. El gobierno mantuvo el control de la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil en los sectores sindicales, campesinos y populares, sirviéndose de la cooptación, marginalización y, en menor medida que en Chile, de la represión. Por último, el sistema de partidos que parecía estar suficientemente institucionalizado da señales que auguran su desinstitucionalización, co-

mo sería: la transferencia constante de políticos de un partido al otro, el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), más que un partido político, sea una maquinaria electoral; que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrado por corrientes, se encuentre en peligro constante de dividirse; y que el Partido Acción Nacional (PAN), aunque quizás el más consolidado, probablemente quedará muy debilitado después de la presidencia de Vicente Fox. A esto se añade el desgaste de la imagen del Congreso, del Instituto Federal Electoral (IFE), de la Tribuna Federal Electoral (Trife) y de los funcionarios de gobierno ante los ciudadanos. Basándose en el modelo de los tres ejes

concluye que la transición en México puede calificarse de *vacía*.

Hélène Combes nos describe en “Las movilizaciones contra los fraudes electorales en los noventa”, un repertorio de acciones colectivas para protestar por los resultados electorales. La manifestación es la acción pacífica de protesta más utilizada. Nos presenta cómo las instituciones políticas, en este caso el PRD, actúan frente a lo que consideran fraude electoral. Para el PRD la marcha es una estrategia para evitar la violencia y la represión, le da visibilidad a un problema local y busca ganar apoyos por los lugares donde pasa el contingente. Un ejemplo fue el “Éxodo por la Democracia”, de Villahermosa (Tabasco) al Distrito Federal

en 1991. Todas las acciones se combinan con la negociación en diferentes momentos.

Otra modalidad es el campamento, cuando no es suficiente la marcha, pues se ejerce mayor presión sobre las autoridades, algunas veces se toman las plazas centrales o zócalos. También está la ocupación o “toma” de los ayuntamientos que impiden las funciones normales de oficina. Al final, una modalidad adicional: los consejos municipales paralelos que intentan ejercer funciones como autoridad en locales alternos. La mayoría de las veces no funcionaron por más de tres meses, casi siempre fueron desalojados con violencia por la policía, como en Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Este repertorio de acciones inscrito profundamente en la historia de la resistencia en México fue retomado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), bajo la reivindicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Los movimientos poselectorales hacen un llamado a respetar los votos por medio del recurso a la “legitimidad popular” y tratan de restituir el resultado de las urnas. El número de manifestantes es también la fuerza del movimiento y los dirigentes adquieren prestigio. La autora nos advierte que estos conflictos poselectorales en el escalón local son susceptibles de desembocar en violencia, por lo que, “la irrupción de las masas” en la transición mexicana, en su dimensión local, se traduce en una fuerte represión.

El escrito de Ernesto Isunza, “Arbitraje ciudadano de disputas partidarias: los Consejos Electorales Federa-

les”, presenta la sistematización teórica del funcionamiento institucional del modelo de los consejos electorales de los que él mismo formó parte. Es indispensable reconstruir los mecanismos de los conflictos e identificar las redes y proyectos políticos, sin lo cual no se pueden interpretar los antagonismos que surgen al interior de los consejos. Con definiciones claras nos describe el diseño de funcionamiento de estos consejos electorales, resultado de múltiples luchas sociales por elecciones justas y libres, de negociaciones entre actores que confrontaron proyectos políticos. Nos habla de la crisis de 1988 hasta la reforma de 1996, en la que se refuerza la independencia y autonomía del IFE. Nos detalla cómo se realizan los “nombramientos en cascada” a partir de los 32 consejeros locales y los 300 consejeros de distrito para demostrarnos las debilidades del cuadro normativo actual. Reafirma la urgencia de reforzar los mecanismos de “control ciudadano” para hacer frente a esas zonas de sombra en las que se conservan prácticas propias del “antiguo IFE” y que representan verdaderas bombas de tiempo. Se refiere al uso personal y discrecional de los recursos financieros, al tráfico de influencias para los puestos profesionales, a la situación precaria de los trabajadores en cuanto a sus derechos, al silencio frente a casos de corrupción y, finalmente, la falta de control administrativo. Por último, nos expone el caso del distrito X en Jalapa, Veracruz, donde los supervisores detectaron una divergencia entre los datos aportados por los capacitadores y los reportados en el programa

electrónico; los consejeros los revisaron y lograron probar la falsificación sistemática de los datos. Inmediatamente se aplicaron medidas para corregir la práctica fraudulenta. El autor destaca la fragilidad del sistema electoral y lo crucial que resulta el papel que desempeñan los consejeros, ya sea en su lucha sistemática y firme por hacer valer sus facultades o en la supeditación a las viejas prácticas.

En la segunda parte, llamada “El municipio”, las coordinadoras fundamentan en una decena de páginas la importancia político-administrativa del nivel municipal en el proceso de transición y descentralización. Describen una serie de instancias y dinámicas de poder que existen por debajo de las autoridades municipales, como son los agentes o delegados municipales que conviven con los “comisarios ejidales” o con las autoridades de las tierras comunales. Con la descentralización, los municipios han adquirido capacidades financieras para retribuir a sus miembros y contratar personal numeroso, como policía, secretarías, mantenimiento, ingenieros y otros. La esposa del presidente municipal preside el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuenta con un fondo para repartir alimentos, regalos a los niños y sus madres. Desde el gobierno de Zedillo administran directamente los fondos del Ramo 33 para infraestructura social y municipal.

Antes de 1988, el nivel infra-municipal estaba totalmente supeditado al presidente municipal y a la cabecera. Muchos factores han influido para reequilibrar esta situación. En primer

lugar, el voto efectivo de sus habitantes para elegir al presidente municipal. A partir del momento en que los candidatos a la presidencia municipal se presentan a nombre de los partidos en competencia, para ganar tienen que solicitar los votos de todos los habitantes de las comunidades del municipio. Y para obtenerlos deben ofrecer alguna compensación a las comunidades subordinadas. En muchas ocasiones, los cabildos, que antes estaban compuestos casi exclusivamente por habitantes de la cabecera, se han abierto a la participación de habitantes de las comunidades para ocupar cargos de síndicos, regidores y hasta de presidentes municipales, lo que constituye una “democratización geopolítica” de esta instancia de gobierno. La repartición de los flujos financieros del Ramo 33 de la cabecera municipal a las comunidades ha sido otro tema abierto a la disputa política. Cada año, el Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (Coplademun) debe reunir a las autoridades municipales, incluyendo a las de las comunidades, a fin de decidir de manera colectiva y por consenso las obras a realizar.

Este proceso de descentralización puede explicar la reivindicación para la creación de nuevos municipios muy extendida y promovida por todos los partidos políticos. Si el municipio se mueve no es únicamente en la cabecera y alrededor de la elección, sino en esta zona de sombra poblada por las localidades subalternas.

Danièle Dehouve, en su texto “El intercambio en política: el voto y su recompensa en el estado de Guerrero”, describe el proceso del multipartidismo

empatado cronológicamente con la aplicación de la descentralización. Este doble proceso visto desde el municipio se traduce en la aparición de una relación de nuevo tipo entre las elecciones y la gestión. Primeramente, los votos llevan al poder a un presidente municipal y su equipo; luego, las personas electas tienen a su cargo la administración directa de un considerable presupuesto. Las reglas del acceso al poder y al ejercicio de éste se encuentran profundamente modificadas, por un lado, por el voto partidario y, por el otro, por la redistribución del monto financiero.

De acuerdo con la autora, falta saber de qué útiles teóricos disponemos para analizar la relación entre el sufragio y su contraparte financiera. A lo primero que recurrimos comúnmente es a la noción de clientelismo, usada por antropólogos y politólogos. Sin embargo, Dehouve ensaya demostrar que es ambigua y peligrosa, aunque plantea cuestiones centrales. Si afirmamos que el multipartidismo y la descentralización se acompañan de prácticas clientelares, éstas se remiten inmediatamente al sistema heredado del PRI y son rechazadas automáticamente. Es diferente si planteamos que la democracia se apoya en intercambios específicos entre electores y electos, y que conviene determinar las formas y modalidades. En ese momento estamos en posibilidad de observar el surgimiento de un nuevo sistema político en el cual los electores disponen, por definición, de algo para intercambiar —su voto— y los electos disponen de algo para distribuir —el monto financiero de la descentralización—.

Por lo anterior es preferible usar el término de “economía del voto”. Significa que toda la vida política local encadena ciclos de reciprocidad.

En “Políticas públicas y pluripartidismo en la Huasteca Potosina”, Julie Devineau nos explica cómo se politiza la implementación de los programas de desarrollo, observados en cuatro municipios: San Antonio, Tancanhuitz, Tampamolón y Tanlajás. Nos detalla las instancias de decisión por las que pasa un proyecto (financiado con las llamadas aportaciones federales a los municipios, en especial del fondo para infraestructura social municipal), y las estrategias de los actores de las diferentes comunidades pertenecientes al municipio para conseguir las inversiones, sean productos o servicios de provecho individual o colectivo. En contraste con la posición crítica de Dehouve respecto al concepto de clientelismo, Devineau nos dibuja las modalidades locales del fenómeno recurriendo a esta noción. Su atención se concentra en la utilización política de los recursos del FAIS (Fondo para Infraestructura Social Municipal) por los regidores municipales electos. Se propone demostrar que la ejecución de la obra pública se inscribe en un registro clientelista bien aplicado a nivel municipal; y la manera como el multipartidismo ha contribuido a transformar, a la vez, los procedimientos y los contenidos de las políticas municipales. Destaca el papel que desempeñan los diferentes “comités” informales de la comunidad para gestionar un proyecto y cómo, a través de esta gestión, se convierten en “notables”, por



Jose Téllez, Elias

Proceso electoral en Acapulco, Guerrero, 2006.

lo que serán tomados en cuenta tal vez para candidatos en algunos de los partidos o para trabajar en el municipio como técnicos o en cargos políticos.

Los efectos del multipartidismo en la ejecución de las políticas de desarrollo son contradictorios. Desde el punto de vista de la participación se observa una cierta democratización de las políticas públicas, entendiéndola como un acceso a las decisiones, mayor información de los presupuestos, opciones a diferentes partidos políticos con redes de políticas públicas, lo que produce mayor interés en participar. Por otro lado, en el plano de los resultados, estas nuevas formas de po-

litización de los programas de desarrollo provocan una pulverización de la inversión pública (los montos, si bien han aumentado considerablemente, han ocasionado también un crecimiento progresivo de la demanda de proyectos) junto a una tendencia a privilegiar “obras visibles” en detrimento de las necesarias. Todo esto sin lograr que las desigualdades entre las comunidades disminuyan ni que los servicios colectivos instalados puedan ser utilizados de igual manera por todos los habitantes. La casa de salud y la escuela, por ejemplo, estarán a mayor distancia para algunos, cuyas condiciones de vida, al encontrarse en la

periferia o en las secciones más alejadas, suelen ser más precarias. A pesar del peso electoral que han adquirido las comunidades, son las cabeceras municipales las que continúan siendo las más beneficiadas por las obras, que suelen ser de relumbrón. A las comunidades les queda “aquello que cuesta menos caro”: pequeños trabajos, como un campo deportivo, muebles para la escuela, transportar enfermos, algunos medicamentos y, como regla informal, el municipio emprende cada año un pequeño proyecto de equipamiento por comunidad. Esto se presenta como un favor personal del presidente municipal. Por todo lo anterior, Devineau afirma que los municipios son actualmente un observatorio privilegiado para analizar las lógicas políticas subyacentes en la política de combate a la pobreza.

Marguerite Bey presenta “Cambios en el tablero político local: Cuquío, Jalisco”. De los 125 municipios de Jalisco, Cuquío se encuentra entre los más pequeños y más pobres. Con una población de menos de 18 mil habitantes, una cuarta parte reside en la cabecera municipal. Cuenta con 200 comunidades, de las cuales 100 tienen menos de 50 habitantes. Se trata de un municipio marcado por más de diez años de experiencia de gobierno de oposición al PRI (desde 1992 el PRD y desde 2003 el PAN). La autora se pregunta si es posible participar en la vida social y política y permanecer fuera de los partidos y, si esto es posible, qué lugar ocuparía en el juego de los partidos políticos. Llama la atención sobre la existencia de una organización que se asume como “neutra”: el Con-

sejo Democrático Municipal (Code-muc), constituido en 1992 por un presidente municipal del PRD y que prefiguró lo que sería después el Coplademun en el gobierno panista.

A través de las estrategias emprendidas por doña María, la autora analiza la aparición de un nuevo actor en la escena política, que mantiene una relación ambigua respecto a los partidos políticos. Se trata de una mujer joven de baja escolaridad, con tres hijos y un marido ausente migrante, beneficiaria de un programa social. Comienza su participación social como promotora del Progresista para coordinar a las mujeres de su localidad ligadas al programa. Después de esta experiencia se convirtió en una de las dos mujeres delegadas de zona en el Codemuc y, posteriormente, por su desempeño fue nombrada coordinadora del Coplademun en el gobierno panista. Su postura política marca una ambigua distancia respecto a los partidos. No era del PRD cuando trabajaba en el Consejo Democrático (organizado por el gobierno del PRD) ni panista cuando trabaja en el Coplademun, pero más adelante tal vez lo sea. Su padre pertenece al PAN y su marido al PRD. Su actividad principal como coordinadora no es remunerada, solamente le reembolsan sus gastos de traslado. Pero ella sabe lo que hace porque en poco tiempo deberá decidirse la jerarquización de los proyectos y entonces estará presente para defender que la electrificación de su comunidad sea considerada como prioritaria. Si esto no sucede renunciará a sus funciones. María no es la única en dudar entre el PRD y el PAN, sin siquiera plantearse la

cuestión de fondo de cuál ideología y cuál programa político representan. Diferentes investigaciones han mostrado que la participación en un partido no responde necesariamente a la adhesión a un programa político, sino a la posibilidad de encontrar nuevas bases de apoyo.

Gabriela Torres-Mazuera, en “Fragmentación de identidades y multipartidismo en la región mazahua, Estado de México”, propone como eje de su análisis la transformación de las categorías de identificación social, que son la fuente de la diferenciación al interior y al exterior de la comunidad. La “ruralidad” y otras categorías de identidad son una construcción social en la cual participan diversos actores, entre los cuales el Estado ha desempeñado un papel muy importante hasta la década de 1980, cuando se retira de la agricultura y transforma su manera de calificar a la población rural. La autora analiza el discurso “campesinista” del Estado en un recorrido histórico que va desde “los ejidatarios, herederos de la Revolución mexicana” hasta “los pobres rurales”; los campesinos pasaron de ser “el motor del desarrollo nacional” al “sector más pobre de la población”. Ahora los habitantes rurales pueden ser beneficiarios de los programas en función de diferentes categorías de identificación: pobres, indígenas, mujeres, jóvenes o adultos mayores.

La autora habla de la transformación de la mediación económica a medida que la agricultura perdió peso como principal actividad económica. Anteriormente, el intermediario económico —habitualmente el cacique local— acaparaba la venta y la compra del

maíz y de los fertilizantes. Actualmente, el presupuesto de la presidencia municipal se ha convertido en la disputa principal de los actores políticos locales. Así, la mediación se presenta ahora entre el nivel municipal y el gobierno del estado, a través de las familias locales dominantes que ejercen el control sobre el gobierno municipal y los partidos políticos.

Torres-Manzuera concluye que el ejemplo de San Felipe demuestra que el multipartidismo, entendido como la consolidación de un sistema más democrático, no significa forzosamente el fin del clientelismo ni del control de recursos por parte de las familias poderosas de la región. Tampoco ha sido la manifestación de la toma de conciencia política por parte de los diferentes grupos de la sociedad civil, que apoyarían un candidato en función de sus posiciones ideológicas. Contrariamente a estas expectativas, el multipartidismo ha significado la multiplicación de los grupos de poder en competencia. Además, la entrada de partidos políticos en la escena local no ha sido la garantía de un mejor proyecto de desarrollo coherente, participativo y portador de propuestas económicas de fondo.

Paula López Caballero escribe “Ambigüedad y poder: democracia y representatividad en Milpa Alta, Distrito Federal”. En un rincón rural al sur de la gran capital mexicana, dedicado al cultivo de nopales y al bosque de pinos, se encuentra Milpa Alta, sede de la administración de la delegación que cuenta con 12 poblados. La autoridad de cada poblado se denomina coordinador de enlace territorial (CET). Estos

coordinadores son elegidos en cada comunidad y ejercen el papel de intermediarios entre su comunidad y las autoridades de la delegación. El ejercicio de esta autoridad entraña una ambigüedad: este cargo no está reconocido legalmente en la administración de la ciudad; sin embargo, ellos reciben un salario de manera informal de la administración pública; gozan de una legitimidad histórica en su comunidad, así que pertenecen a la vez a la comunidad y a la administración pública. Los CET no pertenecen al sistema de partidos, pero gozan de una gran legitimidad en la localidad. Intervienen en los conflictos entre familias, en las gestiones burocráticas, otorgan diferentes constancias de domicilio y pelean presupuesto al delegado. En todo está presente la ambivalencia entre comunidad y delegación; la indefinición del puesto se encuentra en el origen de una gran parte de su poder y fuerza. La ambigüedad constituye un aspecto central en el ejercicio de poder. Uno de estos coordinadores dijo que su poder disminuiría si entraba a trabajar formalmente en la administración pública. La oposición entre los CET y el delegado ha ocasionado conflictos graves. Piden ayuda a la delegación para someter disturbios o evocan la voluntad de la comunidad para no obedecer a la delegación.

Antes de la llegada de las elecciones locales, la legitimidad de los CET como representantes de la comunidad no era criticada por otras autoridades, pues éstas eran designadas y venían del exterior. Ahora los delegados son electos por las urnas y pueden declararse los legítimos representantes de los habi-

tantes de Milpa Alta. Las comunidades han vivido la democratización como una amenaza a su autonomía. Este conflicto de legitimidad ha originado la polarización de la comunidad tradicional: sea como entidad cerrada, retrógrada, sea como garante de los intereses locales, colectivos. Igualmente, la *delegación* puede ser percibida como una institución moderna, neutra, o como corrupta, extranjera y que privilegia intereses partidistas en detrimento de los intereses de la población.

El caso de Milpa Alta muestra cómo una reorganización político-administrativa democrática se superpone a una estructura social y política local; la principal consecuencia se encuentra en la competencia por la representatividad entre los dos sistemas.

Puede considerarse que las principales aportaciones del texto se encuentran, en primer lugar, en la introducción inicial que, me parece, cumple muy bien con el objetivo de facilitar la comprensión del contexto histórico y político de la transición en México para un público francés.

En segundo lugar, en la parte dedicada al municipio, destaca la descripción y sistematización de los detalles de la vida política local en cada uno de los municipios observados en cinco entidades del país por las cinco autoras, análisis que toma en cuenta los dos grandes ejes propuestos acertadamente por la coordinación del libro: multipartidismo y proceso de descentralización financiera. Además, las cinco autoras abonan a la discusión de categorías teóricas como clientelismo, representatividad, relación del ciudadano con los partidos, identidades

fragmentadas, ruralidad, poder y ambigüedad. Destacaría la propuesta de Danièle Dehouve de estudiar la “economía del voto” como un sistema de intercambio entre votos y compensaciones, que se presenta en ciclos de reciprocidad de acuerdo con los tiempos político-administrativos, en los cuales se mantiene la incertidumbre ya que no puede asegurarse que la reciprocidad esperada se presente. Nos preguntamos cómo analizar la reciprocidad en condiciones de inequidad, de desigualdad en los recursos y en el poder, condiciones que no son necesariamente la excepción. Resaltaría también cómo Marguerite Bey desmenuza, en la práctica de un actor social, la relación ambigua que éste mantiene con los partidos políticos, sea PRD o PAN, lo que confirma que la participación en los partidos no responde necesariamente a la adhesión a un programa político o a una identidad ideológica, sino que se trata más bien de racionalidades distintas o de búsqueda de beneficio.

Para terminar, es notable que el libro incluya el video *La política en tierras indígenas*, de Danièle Dehouve. No es lo común, y en la era de la comunicación esta asociación video-palabra ensaya y atrapa futuros prometedores para la ciencia social. Las palabras escritas ceden su lugar a la riqueza de las imágenes: paisajes, fiestas, rostros, gestos. Nos convierte en testigos de los rituales políticos en este proceso cíclico de reciprocidades, de juego de poder e inequidad de recursos. La magia nos permite regresar a las palabras escritas con nuevas miradas.